

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

Mejor que decir es hacer

Se ha convertido en deporte nacional tergiversar las palabras de Cristina. Hacerle decir cosas que no dice, hacerla confrontar con quien no confronta. Que lo hagan los medios hegemónicos no sorprende, es una costumbre instalada desde que Cristina fue elegida presidenta en 2007. Que esta función sea ahora emprendida por algunos dirigentes de organizaciones del proyecto nacional, es de una gravedad inusitada. Emiten documentos y declaraciones públicas sobre lo que supuestamente piensa Cristina. Ofendidos acusan a Cristina de sostener un discurso de “guerra” y maliciosamente lo asimilan con postulados que desde el liberalismo, neoliberalismo y la derecha se han alzado contra los sectores populares. Esta actitud deja entrever un desconocimiento de lo que representaron para los sectores organizados del Pueblo las decisiones adoptadas y las políticas implementadas por los gobiernos de Néstor y Cristina. Niegan también el rol indispensable de la compañera como guía y sostén de la resistencia en el gobierno macrista, como también pretenden negar el rol de Cristina como arquitecta de la construcción de la herramienta electoral que fuera capaz de desalojar de la Casa Rosada a la representación de la oligarquía. Al igual que los medios hegemónicos mienten y tergiversan para no reconocer el rol que a Cristina le asigna el Pueblo peronista, como la esperanza para construir la felicidad y la grandeza de la Patria.

Un discurso de 75 minutos de duración, donde se abordan temas como el modo del ejercicio del gobierno, cómo actúan los sectores del poder, cómo se distribuye la riqueza, el valor del salario y su poder adquisitivo, el proceso inflacionario, la actividad productiva ociosa, la economía bimonetaria y sus consecuencias, la fuga de capitales, la ineficacia del poder de control del Estado, el partido judicial que de la mano del presidente de la Corte Suprema mira las necesidades del poder como derechos y desdeña las necesidades populares “porque no alcanza para todos”, entre tantos otros aspectos económicos y sociales, y desde luego también, sobre la tercerización de los programas sociales, implica un profundo análisis de la situación del país y de cómo repercute en los sectores populares. Reducir semejante exposición a un supuesto ataque hacia las organizaciones sociales parece una lectura liviana, de una profunda ignorancia sobre las políticas públicas que se aplicaron mientras Cristina fue presidenta de este país y de una tergiversación de los dichos de la vicepresidenta, con motivaciones opacas.

Que los movimientos sociales tienen un lugar de trascendencia en nuestro país es indudable, que reparan y asisten donde el Estado no asiste ni contiene, que son organizaciones que protegen a vastos sectores de nuestro Pueblo en situación de hambre y necesidad; es una realidad conocida por todos y todas. Somos parte de esas organizaciones populares que tuvieron por origen las desigualdades y la miseria planificada de los 90 y del macrismo. Estuvimos al lado de la Carpa Docente que luchó contra la destrucción de la educación pública en pleno menemismo, nos sentimos parte de los cortes de ruta en Cutral Co y Mosconi que los trabajadores y trabajadoras de YPF realizaron junto al Pueblo entero como consecuencia de la privatización de las

empresas públicas estatales. Somos producto de los cortes de la Ruta 3 en el kilómetro 21 en La Matanza, como también lo somos de las marchas federales de la CTA y del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). Somos parte de los cientos de trabajadores y trabajadoras asesinadas por los procesos represivos que instalaron los gobiernos liberales. Estuvimos en la resistencia del 19 y 20 de diciembre. Estuvimos en el corte del Puente Pueyrredón hace exactos 20 años cuando la “mejor policía del mundo” asesinó a nuestros compañeros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.

Somos organizaciones que contienen la historia de esas luchas y la convierten en fuerza de trabajo en cada cooperativa de trabajo que posee medios de producción, en las que desarrollan procesos organizativos asociados en tareas urbanas y rurales, en emprendimientos ligados a obras municipales y provinciales. Somos parte de quienes dimos respuestas en comedores y merenderos durante el macrismo y la pandemia. Somos quienes sufrimos con nuestrxs compañerxs muertxs producto de la exposición al virus mortal y al sufrimiento de nuestro pueblo. Desde estas experiencias, como organizaciones sociales con base territorial, venimos a manifestarnos también sobre lo que representó el gobierno de Néstor y Cristina para nuestro sector.

A comienzos de la presidencia de Néstor y producto de una política social heredada del gobierno de Eduardo Duhalde, existían en nuestro país el Programa Jefes y Jefas de Hogar, que Néstor reconvirtió con diversas políticas públicas en trabajo organizado. Los Programas de Agua más Trabajo, Cloaca más Trabajo, Casa más Trabajo, realizados por cooperativas de trabajo, gestionadas por organizaciones sociales, municipios y el Estado nacional. Los programas lanzados por el Ministerio de Trabajo de Programa de Trabajo Autogestionado, Programa de Inclusión Laboral, Programa de Empleo Comunitario, Programa de Empleo Independiente, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Programa de Formación Continua, Argentina Trabaja, la Ley Concursos y Quiebras (2011) que permite a Trabajadores y Trabajadoras organizadxs en Cooperativas continuar con la gestión de empresas en crisis (quebradas o vaciadas por sus patrones), el programa Emergencia Habitacional (que construyó más de 150 mil viviendas en todo el país a través de Cooperativas de Trabajo, se crearon desde el 2003 al 2015 más de 20 mil matrículas de cooperativas de las cuales el 80% son de construcción de Viviendas) y, desde luego, la Asignación Universal por Hijo; son parte de hechos incontrovertibles sobre cómo se atendió la demanda social durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

La existencia de las organizaciones sociales que contribuyen a contener las anemias sociales, SON CONSECUENCIA DE LAS NEFASTAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DEL NEOLIBERALISMO Y LA DERECHA EN NUESTRO PAÍS.

Los gobiernos de Néstor y Cristina combatieron esas políticas, describieron a los enemigos del país, los enfrentaron y pusieron a las organizaciones sociales y sindicales en otro plano de discusión, las sentaron a debatir cómo distribuir la

riqueza.

Son los mismos poderes reales que, como describe Cristina de manera brillante, interactúan con el Estado casi permanentemente y son recibidos por funcionarios que no funcionan, los que necesitan del aumento de los programas sociales. **Los programas sociales y los miles de argentinx que los obtienen son el “ejército de reserva” en una Argentina que dejó de discutir el ingreso o cómo se distribuye la riqueza, para comenzar a discutir cómo se reparten las sobras. Cada programa social extendido en el tiempo constituye un debilitamiento del salario real, este salario reducido en su capacidad adquisitiva implica un enriquecimiento del empresario que gana por doble vía: por aumento desmesurado de precios y por una política salarial depreciada.**

El problema no es de falta de trabajo y de salarios pauperizados, sino del modo en que se distribuye la riqueza que genera el país. Este es el combate real del discurso de Cristina que las organizaciones sociales y sindicales debieran reivindicar. Es imprescindible generar condiciones de trabajo dignas sea en trabajadores y trabajadoras de la economía formal como en las trabajadoras y trabajadores de la economía social.

Todos podemos identificar quienes son los responsables de la ampliación indiscriminada de programas sociales y el “negocio” de las altas y bajas de esos programas y eso no involucra a los cientos de miles de argentinos y argentinas que se encuentran insertos en esos programas, eso involucra a los dirigentes que se ocupan de tales maniobras desde los dos lados del mostrador. No son las organizaciones sociales las apuntadas por Cristina, son los dirigentes inescrupulosos que todos podemos identificar. No son las organizaciones sociales las que señala Cristina como los beneficiarios reales de la fuga y la especulación, sino los mismos que amasan sus fortunas a costa de la falta de control de precios y de un salario depreciado.

Las sociedades corren un severo riesgo cuando aquellxs excluidxs o marginadxs de derechos se convierten en excluidxs permanentes a los que observamos y contenemos sin revertir su situación de exclusión. No puede ser el Estado un actor contemplativo de esa marginalidad conservadora. **Nuestro paisaje social no puede tolerar que se perpetúe la exclusión. Resulta inmoral que en una Argentina que genera riquezas enormes para pocos sectores de la sociedad se confeccione un certificado de exclusión o un Ministerio y que eso sea tolerado por el Estado y reafirmado por algunas organizaciones sociales. Allí no hay ascenso social, no hay posibilidad de escolaridad futura, no hay derecho a la salud, no hay vivienda digna, no hay trabajo digno, hay exclusión perpetua garantizada. Allí no hay peronismo.**

Cuando la derecha brama contra los “vagos”, “planeros” y demás insultos, no

lo hacen con la intención de incluirlos o “darles trabajo”, sino de liquidarlos, de someterlos, de esclavizarlos para beneficio de sus mismos intereses. No quieren “darles trabajo” sino tener mano de obra gratuita y sometida, se trata de un modo de mantener la marginalidad para recibir los beneficios que tiene, pero alejados de la mirada permanente que detesta. Las organizaciones sociales y los trabajadores y trabajadoras que integran estas organizaciones no podemos mantener la idea de sostener un programa asistencial permanente, es necesario generar la formación en oficios, la inclusión en trabajo asociativo, la promoción del acceso a la tierra, políticas de empleo de inclusión y no precarizadas y acceso a derechos laborales, sociales y previsionales como cualquier trabajador dependiente.

Los gobiernos de Néstor y Cristina recibieron un país con un 27% de desempleo, tasas de pobreza y marginalidad escalofrantes y más de un millón de personas insertas en el Programa Jefes y Jefas, que en 2015 se disminuyó a 200 mil beneficiarios. En 2019 se aumentaron 800 mil y hoy estamos en 1,2 millones, con 7,1% de desempleo. No es posible que el Estado normalice esa situación. Discutir el poder real, los factores económicos en juego, los efectos de bimonetarismo, la renta desmesurada de sectores de servicios y financieros y desde luego la distribución de la riqueza, requiere de discutir de salarios reales fortaleciendo el poder adquisitivo y salir de la lógica de programas sociales en aumento y perpetuos.

La discusión abierta por Cristina Fernández de Kirchner el 20 de junio, fue esa y es bienvenida y necesaria en un gobierno autodefinido como defensor de los derechos de los más vulnerados.

